

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00216-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada por la ciudadana **SUSAN ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ** identificada con la C.C 53.105.535 quien actúa como rectora de la **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA** contra el **MINISTERIO DEL TRABAJO**.

ANTECEDENTES

La ciudadana **SUSAN ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ** identificada con la C.C 53.105.535 quien actúa como rectora de la **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA** inicia acción de tutela contra el **MINISTERIO DEL TRABAJO** por considerar que se le está vulnerando el **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Que mediante Resolución 5647 del 31 de octubre de 2018 notificada mediante aviso a su representada el 16 de noviembre de 2018, se resolvió por parte del Ministerio del Trabajo: “SANCIONAR a la empresa Fundación Universitaria INCCA DE COLOMBIA (...) con multa correspondiente a sesenta y cinco (65) salarios mínimos mensuales legales vigentes correspondientes al año 2018 (...)”; y el 29 de noviembre de 2018 la Universidad Incca de Colombia presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

Que el Ministerio del Trabajo, a través de la Resolución No. 4222 del 15 de octubre de 2019, resolvió el recurso de reposición, confirmando íntegramente la Resolución 5647 del 31 de octubre de 2018.

Que el Ministerio del Trabajo, por medio de la Resolución 4897 del 20 de noviembre de 2019, notificada por aviso a la **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA**, el 03 de marzo de 2020, resolvió el recurso de apelación confirmando todas y cada una de las partes de la Resolución No. 5647 del 31 de octubre de 2018.

Que el 21 de abril de 2020 la **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA** radicó derecho de petición ante el Ministerio del Trabajo a través del correo solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co; solicitando: “informe sobre la totalidad de procesos de cobro coactivo, disciplinarios y/o procesos sancionatorios que se

encuentran vigentes en contra de la Universidad Incca de Colombia NIT. 860.011.285-1. Copia del expediente completo que origino la Resolución No. 04897 del 2019, la cual es anexa a este escrito. Con base en lo anterior, se remita a los correos electrónicos oficinajuridica@unincca.edu.co los expedientes completos de los mencionados cobros coactivos”.

Que el 28 de abril de 2020 el Ministerio del Trabajo a través del correo electrónico cbogota1@mintrabajo.gov.co informó: “(...) su solicitud fue radicada con el # provisional 05EE202012050001300013, remitido al grupo de cobro coactivo para su trámite”; sin embargo, a la fecha de la presentación de la acción constitucional, habiendo transcurrido aproximadamente tres meses no se ha dado respuesta.

Que el 18 de junio de 2020 la **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA** radicó nuevamente petición ante el Ministerio del Trabajo a través del correo electrónico solucionesdocumnetal@mintrabajo.gov.co solicitando: “informe sobre la totalidad de procesos de cobro coactivo, disciplinarios y/o procesos sancionatorios que se encuentran vigentes en contra de la Universidad Incca de Colombia NIT. 860.011.285-1. Copia del expediente completo que origino la Resolución No. 04897 del 2019, la cual es anexa a este escrito. Con base en lo anterior, se remita a los correos electrónicos oficinajuridica@unincca.edu.co los expedientes completos de los mencionados cobros coactivos”.

Que el 19 de junio de 2020 el Ministerio del Trabajo a través del correo electrónico correspondenciasipost@mintrabajo.gov.co informó lo siguiente: “(...) su solicitud se ha recibido satisfactoriamente, se da radicado para Bogotá con número 05EE202074100000020680 con fecha 19-06-2020”.

Que transcurrido el término legal que contempla la Ley 1755 de 2015 para dar respuesta a las peticiones, la entidad accionada no se ha pronunciado al respecto, actuación que lesiona y vulnera el derecho fundamental de petición, por cuanto, sin razón alguna, se abstiene de dar respuesta a las peticiones, así como ha informado el motivo de la demora.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele el **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN** y se ordene al **MINISTERIO DEL TRABAJO** proceda a contestar el derecho de petición elevado el 18 de junio de 2020; y en consecuencia se expida con destino a la **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA** los documentos solicitados en la petición.

PRUEBAS

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Fotocopia simple de la cedula de ciudadanía de la ciudadana **SUSAN ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**.
- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
- Pantallazo del envío del derecho de petición de fecha 21 de abril de 2020.
- Escrito derecho de petición con fecha del 20 de abril de 2020.

- Pantallazo del envío del derecho de petición de fecha 20 de junio de 2020.
- Escrito derecho de petición del 10 de junio de 2020.
- Pantallazo de la radicación satisfactoria de fecha 19 de junio de 2020
- Pantallazo trámite al derecho de petición, con fecha 18 de junio de 2020
- Escrito derecho de petición del 18 de junio de 2020 dirigido al Ministerio del Trabajo.
- Resolución 004897 del 20 de noviembre de 2019.

La parte accionada, anexo con la contestación de la tutela, los siguientes documentos:

-MEMORANDO con asunto "Traslado Parcial por competencia del derecho de petición Radicado No. 05EE2020741100000020680 del 19 de junio de 2020".

-Escrito asunto "Respuesta Radicado No. 05EE2020741100000020680 del 19 de junio de 2020"

-Pantallazo envió de correo adjuntando respuesta al radicado No. 05EE2020741100000020680 del 20 de junio de 2020 presentada ante el Ministerio de Trabajo.

Resolución 784 de 2020 "por medio de la cual se adoptan medidas transitorias por motivos de emergencia sanitaria".

-Resolución 876 del 2020 "por medio de la cual se modifican las medidas transitorias previstas en la Resolución No. 0784 del 17 de marzo de 2020 en virtud de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020".

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 21 de julio de 2020, se ordenó la notificación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 22 de julio de 2020, se notificó al **MINISTERIO DEL TRABAJO**, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- **EL MINISTERIO DEL TRABAJO**, brindó contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

La entidad accionada refirió: "(...) Asigne la contestación al derecho de petición a la Dra. Claudia Romo el día 24 de julio de 2020, la respuesta se encuentra en trámite, teniendo en cuenta la suspensión de términos decretada en la Resolución 784 y 876 de 2020.

Que a través de las Resoluciones No. 784 de 17 de marzo y 876 del 01 de abril de 2020 el Ministerio de Trabajo dispuso la suspensión temporal de algunas actividades realizadas y en consecuencia la suspensión de términos procesales en todos los trámites, actuaciones y procedimientos de competencia del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial de Riesgos Laborales, de la Oficina de Control Interno Disciplinario, de las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e Inspección del Trabajo y Seguridad Social.

La vigencia de las medidas adoptadas será hasta que se supere la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social en los términos del inciso 3 del artículo 6 del Decreto 491 de 2020, así como la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por lo cual se reanudarán los términos a partir del día hábil siguiente, en las condiciones señaladas en las normas procesales que regulan la interrupción y reanudación de términos.

Así pues, una vez se disponga el levantamiento de los términos se procederá de conformidad con lo requerido de fondo por el peticionario, circunstancia aclarada en la respuesta que le fueran brindada al peticionario en la oportunidad”.

De manera posterior se allegó nueva contestación, indicando a la instancia judicial: “ (...) Ahora bien, es cierto que el Ministerio del Trabajo No dio respuesta dentro del término de ley, sin embargo, una vez notificado de la acción constitucional impetrada por la UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, se hicieron todas las gestiones para resolver de fondo la petición. Así pues, la Coordinación del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control expidió respuesta a la petición a través de radicado número 08SE2020731100000009790 del 27 de junio de 2020 (...).

La anterior respuesta fue comunicada el día 27 de julio de 2020 al señor JUAN SEBASTIAN AREVALO BUITRAGO, en calidad de Representante Legal de la Universidad INCCA de Colombia, en el correo electrónico oficinajuridica@unincca.edu.co el cual fue suministrado por él mismo para tal efecto (...). ”.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*.

En el caso bajo examen, la ciudadana **SUSAN ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ** identificada con la C.C 53.105.535 quien actúa como rectora de la **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA**, se encuentra legitimada en la causa por activa para interponer la acción de tutela, toda vez que aquella ejerce la representación legal de la institución de educación superior y aquello fue debidamente probado con la certificación expedida por el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, el **MINISTERIO DEL TRABAJO**, hace parte de las carteras ministeriales del poder ejecutivo a nivel nacional, además, es a quien se le atribuye vulneración del derecho invocado y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

INMEDIATEZ

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad.

La Corte Constitucional en Sentencia T-044/19 señaló, frente a este requisito: “El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Sobre el particular es preciso señalar que la actora interpuso derecho de petición el 21 de abril de 2020, reiterando la misma, mediante escrito presentado el 18 de junio de 2020, y el 17 de julio de 2020, procedió a promover acción constitucional contra el **MINISTERIO DE TRABAJO**, dejando tan solo transcurrir, dos meses y 26 días para su interposición.

SUBSIDIARIEDAD

El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa, ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa.

El Despacho advierte que con la interposición de la tutela se busca la protección del **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN** y es la vía que encuentra la accionante para asegurar su ejercicio.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en

el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a esta juzgadora determinar si el **MINISTERIO DEL TRABAJO** vulneró el **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN** al no proceder a dar contestación a la solicitud presentada por la **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA** el día 21 de abril de 2020 y reiterado en escrito del 18 de junio del mismo año.

Dentro de la documental anexa se encuentra el derecho de petición elevado el 21 de abril de 2020, solicitando: “1. Informe sobre la totalidad de procesos de cobro coactivo, disciplinarios y/o procesos sancionatorios que se encuentran vigentes en contra de la Universidad Incca de Colombia. NIT. 860.011.285-1.2. Copia del expediente completo que originó la Resolución No. 04897 del 2019, la cual es anexa a este escrito.3. Con base en lo anterior, se remita a los correos electrónicos oficinajuridica@uninca.edu.co o Hernando.ramirez@unincca.edu.co los expedientes completos de los mencionados cobros coactivos”.

Así mismo el derecho de petición elevado el 18 de junio de 2020 solicitando: “1. Informe sobre la totalidad de procesos de cobro coactivo, disciplinarios y/o procesos sancionatorios que se encuentren vigentes en contra de la Universidad Incca de Colombia NIT.860.011.285-1.2. Copia del expediente completo que origino la resolución No. 04897 del 2019, la cual es anexa a este escrito.3. Con base en lo anterior, se remita a los correos electrónicos oficinajuridica@unincca.edu.co los expedientes completos de los mencionados cobros coactivos”.

Ahora bien, en la contestación allegada en segunda oportunidad y dentro del término legal conferido por este Despacho al accionado, se informó:

“(…) Ahora bien, dando tramite a la solicitud de referencia, este Despacho se permite informarle que una vez analizadas las bases de información internas del Grupo Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección Territorial Bogotá se evidencio que la Universidad INCCA de Colombia tiene los siguientes procesos:

BOGOTA-PIVC	29489	3/05/2017	SINTRAUNINCCA	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	17	PAULA CATALIN ABOHORQUEZ	EN RECURSO	SANCIÓN	
BOGOTA-PIVC	97585	2/06/2015	SINTRAUNINCCA	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	37	ANDREA CAROLINA AVILA ARROYO	EJECUTORIAL	ARCHIVO	
BOGOTA-PIVC	115291	30/06/2015	MARIA TERESA GARZÓN PULIDO-PRESIDENTA SINTRAUNINCCA	UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	9	MANUEL ROBERTO VANEGAS MONROY	DECISIÓN	ARCHIVO	
BOGOTA-PIVC	16986	5/02/2015	MARTHA PATRICIA PELAEZ ROMERO	UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	8	JULIAN ANDRES GARZON AREVALO	EJECUTORIAL	ARCHIVO	
<u>BOGOTA-PIVC</u>	<u>214284</u>	<u>9/11/2015</u>	<u>JUNTA DIRECTIVA SINDICATO INCCA DE COLOMBIA</u>	<u>MARIA SOLITA QUIJANO SAMPER-UNINCCA</u>	<u>41</u>	<u>ROMAN ERNESTO DIAZ JIMENEZ</u>	<u>EN RECURSO</u>	<u>SANCIÓN</u>	
BOGOTA-PIVC	143404	5/08/2016	SINTRAUNINCCA	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INCCA	23	LEONARDO HENAO ZULUAGA	DECISIÓN EN AVERIG.	ARCHIVO	
BOGOTA-PIVC	42007	27/07/2017	PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD INCCA	UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	8	JULIAN ANDRES GARZON AREVALO	DECISIÓN EN AVERIG.	ARCHIVO	
BOGOTA-PIVC	OSEE2018120400000048651-65237-52262-5247-33477-135717-138717-41473-33140-43684-44055-47077-67228	22/08/2018	ELSAN MARLEN BALLESTEROS.SYLVIA AMARIA SALZAR ARIZA Y OTROS	UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	14	JORGE ANDRES BOLIVAR RIVERA	APERTURA PROCESO SANCIONATORIO	FORMULACIÓN DE CARGOS	
BOGOTA-PIVC	11EE2017741100000103070	9/11/2017	LAURA CAROLINA GONZALEZ ARANGUREN	UNIVERSIDAD INCCA	5	IVAN DARIO AGUILAR	AVERIGUACIÓN PRELIMINAR		
BOGOTA-PIVC	OSEE2018120400000048651-rad 52262-rad 65237- rad 5247-rad 33477-rad 135717-rad 138717- rad 138717- rad 41473 - rad 33140 - ra 43684-rad 44055-rad 47077-rad 67228-	28/08/2018	ELSA MARLEN BALLESTEROS	UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	14	JORGE ANDRES BOLIVAR RIVERA	APERTURA PROCESO SANCIONATORIO		
BOGOTA-PIVC	23775	12/07/2018	GINA ORDRIGUEZ Y OTROS	UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	8	MONICA DOMINGUEZ ALVAREZ	TRASLADO		
BOGOTA-PIVC	8985	9/03/2018	MERCEDES RIVERA ROA	UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	12	ALBA RAMIREZ	TRASLADO POR COMPETENCIA		
BOGOTA-PIVC	104823	1/06/2016	SINTRAUNIICCA	FUNCIÓN UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA	26	MARIA VICTORIA GALLON LOZANO	TRASLADO POR COMPETENCIA	TRASLADO POR COMPETENCIA	

En cuanto a la reproducción de documentos públicos solicitada, es importante traer a colación lo referido en el artículo 29 de la Ley 1755 de 2015 que establece lo siguiente: (...)

En virtud de lo anterior su solicitud de copias debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 2446 del 25 de octubre de 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo que determina (...).

Dicho lo anterior, nos permitimos informar que una vez se levante el aislamiento preventivo obligatorio en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia

del Coronavirus COVID- 19, determinado en el Decreto No. 531 del 08 de abril de 2020, se emitirán las reproducciones correspondientes de los procesos que se encuentran en la Coordinación de Prevención, Inspección Vigilancia y Control PIVC, de la Dirección Territorial Bogotá, con la entrega del recibo de pago expedido por la entidad bancaria correspondiente antes dicha”.

Igualmente, respecto a la comunicación de la respuesta, se remitió la aludida respuesta al derecho de petición al correo electrónico informada por el peticionario, este es oficinajuridica@unincca.edu.co , el día 27 de julio de 2020.

Ha de precisarse que la Resolución 0784 de 2020 en el artículo 2 numeral 2, establece: “ Las direcciones territoriales, las oficinas especiales y las dependencias del nivel central toman las medidas para que siempre exista un grupo de inspectores del trabajo y seguridad social, y demás servidores, para atender los trámites y procedimientos cuyos términos no se encuentran suspendidos conforme al numeral anterior; así como por ejemplo, **la respuesta a los derechos de petición**, requerimientos de autoridades de control, cuestionarios del Congreso de la República, la vigilancia judicial, la respuesta a las acciones de tutela y demás actuaciones judiciales, y la atención de solicitudes de otras autoridades competentes”. Resaltado del Juzgado.

En virtud de lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la suspensión de términos no abarca la obligación de dar respuesta a los derechos de petición presentados ante la entidad; no obstante, y pese a la demora por la entidad para emitir respuesta a la contestación del derecho de petición presentada por la accionante, ha de precisarse que conforme a los antecedentes descritos y la documental que obra en el plenario, ponen de presente que no hay lugar a proteger el derecho fundamental de petición invocado por la actora, pues, conforme con la respuesta que la entidad accionada, se advierte que el derecho de petición presentado ha sido contestado, y pese a que no se expiden las copias solicitadas en el escrito petitorio, si se indicó, por el ente accionado, que una vez se cancele el valor de la expedición de aquellas así como se levante el aislamiento preventivo obligatorio, ocasionado en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID- 19, se procederá a la reproducción de la documental requerida por la accionante; respuesta que fue puesta en conocimiento a través del canal digital que indicó la accionante en el derecho de petición, “oficinajuridica@unincca.edu.co” y el que coincide con el reseñado en el escrito de tutela “oficinajuridica@unincca.edu.co”. configurándose así un hecho superado, desde el momento de interposición de la acción constitucional y el pronunciamiento del fallo.

En virtud de lo anterior este Despacho Judicial, no advierte que la entidad accionada haya incurrido en acción u omisión que viole y/o ponga en riesgo el derecho invocado por la accionante.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR** el amparo deprecado por **SUSAN ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ** identificada con la C.C 53.105.535 quien actúa como rectora de la **UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA** contra el **MINISTERIO DEL TRABAJO**, conforme a la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 30 FAMILIA BOGOTÁ

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

246416c461c3a25780937fffd75713fa8592454c1b03741c13382dcf1217497a

Documento generado en 03/08/2020 11:10:44 a.m.